



8 DE ENERO 2021 - JANUARY 8TH 2021

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA AL CIERRE DE 2020

VIOLATIONS AGAINST HUMAN RIGHTS IN NICARAGUA AT THE END OF 2020

La Unidad Nacional informa a medios de comunicación y ciudadanía en general, el registro de las violaciones a los derechos humanos ocurridas este 2020 en Nicaragua. Estos datos han sido posibles gracias al monitoreo de diversas organizaciones, a quienes agradecemos por su compromiso y labor. En el último trimestre se evidencia una escalada en los niveles de violencia de distintos tipos a nivel nacional. Mientras la institución policial ha estado abocada, casi exclusivamente, a la represión y no a la prevención del delito. La Unidad Nacional denuncia ante la comunidad nacional e internacional, especialmente ante organismos de derechos humanos, que el régimen mantiene un estado policial de facto, de violaciones diarias a los derechos ciudadanos y de falta total de libertades civiles, de organización y movilización, que amenazan cada día la vida e integridad física de la población nicaragüense.

120 personas presas políticas actualmente.

110 detenidas ilegalmente tras la insurrección de abril de 2018 y 10 detenidos antes de esta fecha. Señalamos que del total de personas presas políticas 64 fueron capturadas a lo largo de este 2020. Asimismo, 31 son excarcelados que fueron recapturados. La mayoría de reos de conciencia se encuentran en el Sistema Penitenciario "La Modelo".

71 femicidios durante el 2020. En muchos de los casos las mismas mujeres asesinadas o sus familias habían puesto las denuncias ante la Policía Orteguista, pero estos nunca tomaron alguna acción, pese a que el acceso a la justicia es clave para poner fin a la impunidad y prevenir la violencia machista contra las mujeres y las niñas.

Más de 943 ataques al periodismo independiente

entre julio y diciembre de 2020. La libertad de expresión, información y prensa continúan restringidas en el país. Las intimidaciones, las amenazas, las judicializaciones ilegales, los robos de equipos, los registros sin orden judicial y las retenciones arbitrarias se han convertido en asuntos cotidianos para las y los periodistas independientes. Todo apunta a que se agudice el nivel represivo en 2021. Medios como Confidencial y 100% Noticias cumplieron recientemente dos años de haber sido ilegalmente confiscados.

Más de 2,867 personas han muerto por Covid-19

desde el inicio de la pandemia, a mitad de marzo, en el país. Pero las autoridades sanitarias nicaragüenses solo registran 165 en total, ocultando las cifras reales, pese que la misma Organización Mundial de la

Salud (OMS) ha solicitado que se revelen los datos verdaderos para medir el impacto en la población del país. Esto constituye una violación a los derechos humanos y un irrespeto a las familias que sufren por sus deudos. Por el contrario, el régimen promueve actividades masivas y públicas que contravienen las explícitas recomendaciones de la OMS y la OPS.

112 muertes en el personal de salud y 52 en el personal docente por Covid-19. Pese a que el personal médico se encuentra en la primera línea de batalla contra la pandemia, la dictadura impidió y prohibió durante varios meses que se protegieran incluso con mascarillas. Tampoco suspendió las clases presenciales en las escuelas y colegios, con todos los riesgos que ello implica. Ni el Minsa ni el Mined han revelado cifras oficiales sobre doctores y profesores, respectivamente, muertos por el virus.

Más de 50 ataques a la Iglesia Católica. Entre los ataques hay profanaciones y amenazas de muerte contra sacerdotes críticos al régimen. En un claro repudio a la Iglesia Católica y la libertad religiosa, el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo usan retóricas de odio que incitan a sus fanáticos partidarios al acoso, la intimidación y los ataques físicos contra el clero católico, los fieles y los lugares de culto. El último hecho de gravedad fue el atentado terrorista que provocó el incendio en la capilla de la Sangre de Cristo, en la Catedral de Managua.

Uso de leyes, una nueva modalidad de ataque a la oposición. Utilizando la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional recientemente aprobó la inverosímil "Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz", una ley que además de ser violatoria a los derechos constitucionales, anula por completo la competencia política para las elecciones programadas para noviembre de 2021.

Esta nueva ley, se une a otras tres normas aprobadas en la Asamblea en la recta final de este 2020, las cuales están encaminadas a callar, criminalizar y penalizar a la oposición y a los periodistas independientes: "Ley Especial de Ciberdelito", "Ley de Regulación de Agentes Extranjeros" y la instauración de cadena perpetua por "crímenes de odio". Estas leyes que violan los derechos constitucionales, conforman un andamiaje que da sustento

jurídico a la re-presión que el régimen mantiene en el país.

Los juicios viciados contra las personas presas políticas siguieron sin importar la pandemia, ni el paso de catástrofes naturales ni las festividades características de cada mes. Esto atenta contra la ley y violenta los derechos a los ilegalmente enjuiciados. Hasta hoy, de los 120 presos políticos, 25 enfrentan procesos judiciales y 95 ya cuentan con una sentencia condenatoria.

Los asesinatos a campesinos no cesaron. Aunque no es posible señalar datos concretos por las dificultades obvias en este caso, las ejecuciones extrajudiciales en el campo nicaragüense o en los bordes fronterizos con Honduras y Costa Rica, no solo se han mantenido, sino que han aumentado. Los crímenes siguen sin esclarecerse, así como también quiénes son los implicados en estos asesinatos atroces, que han empujado a decenas de las familias a huir y dejar sus casas por el asedio constante que sufren por parte de la Policía, el Ejército o los paramilitares.

El abandono estatal a las comunidades en el Caribe de Nicaragua se evidenció tras el paso de los huracanes Eta e Iota, que dejaron a centenares de familias damnificadas. El régimen, que no brindó una respuesta efectiva ante el desastre, también evitó que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil enviara ayuda humanitaria. Una vez más criminalizó la solidaridad.

Asimismo, se encargó de realizar proselitismo político con las donaciones enviadas por organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La ayuda solo fue entregada a personas afines al Frente Sandinista, cometiendo un acto inhumano en un momento de extrema necesidad para todas las personas, sin distinción política, en las comunidades más afectadas del Caribe.

52 líderes de la Unidad Nacional asediados y perseguidos. A lo largo del país, durante estos 12 meses, medio centenar de líderes nacionales y territoriales de la Unidad Nacional fueron perseguidos, asediados, golpeados, requisados, robados, detenidos. Hasta la fecha mantiene encerrados arbitrariamente y en sus propios domicilios a varios de nuestros líderes.

La extrema situación de violencia que persiste

en Nicaragua, las violaciones a los derechos humanos, el terrorismo de Estado, y la falta de voluntad política por parte de la dictadura de los Ortega-Murillo para detenerla, es especialmente grave en un año electoral.

Reiteramos nuestro compromiso con la lucha por la libertad de las personas presas políticas y el apoyo y trabajo conjunto con sus familiares.

Ratificamos nuestra voluntad de continuar denunciando a nivel internacional a la dictadura, demandando las debidas sanciones contra quienes han cometido o encubren actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Reafirmamos nuestra decisión de continuar organizándonos territorialmente y movilizándonos, por todos los medios posibles, para recuperar las libertades ciudadanas, alcanzar las reformas electorales que demandamos. Creemos conquistar la democracia por la vía electoral, pero para ello se necesitan las condiciones habilitantes.

Violations Against Human Rights in Nicaragua at the End of 2020

The National Union informs the media and the general public about the registration of violations against human rights that occurred during 2020 in Nicaragua. This data is possible thanks to the monitoring done by diverse organizations, whom we would like to thank for their commitment and work. In the last trimester of the year, it became clear that the levels of different forms of violence have escalated nationally. In the meantime, the Police has remained mostly dedicated to repression and not preventing crime.

The National Union denounces to the national and international community, especially to human rights organizations, that the regime maintains a "de facto" police state, with daily citizen rights violations and a lack of civil liberties, of organization and mobilization, that threatens every day the physical integrity of the Nicaraguan people.

120 political prisoners are currently imprisoned.

110 were illegally detained after the insurrection of April 2018 and 10 were incarcerated before that date. We point out that out of those who are imprisoned, 64 were captured during 2020. Likewise, 31 of those who were released were recaptured. Most of the prisoners of

conscience are in the prison called "La Modelo".

71 femicides took place during 2020. In many cases the women who were assassinated had made denunciations to the Ortega linked Police, but this never took action, despite the fact that access to justice is necessary to end impunity and prevent misogynistic violence against women and female children.

More than 943 attacks to independent journalists have occurred from July to December 2020. Freedom of speech, information and press continues to be restricted in the country. Intimidations, threats, illegal judicializations, theft of equipment, searches without warrants and arbitrary detentions have become commonplace for journalists. Everything points to a deterioration of repression in 2021. Media such as Confidencial and 100% Noticias recently turned two years since they have been illegally confiscated.

More than 2,867 people have died of COVID-19 since the beginning of the pandemic in the country, in mid-March. But the sanitary Nicaraguan authorities only register 165 such deaths, hiding the real statistics, despite the fact that the World Health Organization (WHO) has requested that the real statistics are revealed to appropriately measure the impact of the pandemic on the population of the country.

This represents a human rights violation and a lack of respect for the families that have lost their relatives. Instead, the regime promotes massive and public activities that go against the recommendations made by WHO and the Organization for Health (OH).

112 deaths across medical personnel and 52 across educational personnel have occurred due to COVID-19. Despite the fact that medical personnel are in the first line of battle against the pandemic, the dictatorship impeded and prohibited during several months that these were protected even with masks. The regime did not suspend in person classes either in schools and universities, despite the risks this poses. Neither the Departments of Health (MINSAL) nor Education (MINED) have revealed official statistics regarding doctors and teachers, respectively, that have died from the virus.

More than 50 attacks against the Catholic church have occurred.

Among the attacks there are profanations and dead threats against bishops critical of the regime. In a clear repudiation of the Catholic church and religious freedom, the dictator Daniel Ortega and his wife Rosario Murillo use a hate rhetoric that animates their followers who are prone to harassment, intimidation and physical attacks against the Catholic leaders, their followers and their temples of worship. The last serious event was the terrorist attack that led to the burning of the Sangre de Cristo Chapel, in the Cathedral of Managua.

Use of the law, a new modality to attack the opposition.

Using the "Sandinista" machinery in the National Assembly the regime recently approved the implausible "Law of Defense of the Right of the People to Independence, Sovereignty and Auto-determination for the Peace", a law that besides violating constitutional rights, completely nullifies political competition for the election programmed for November, 2021.

This new law, joins other three that have been approved in the National Assembly toward the end of 2020, all of which have the objective to silence, criminalize and penalize the opposition and independent media. "Special Law of Cyber-crime", "Law of Regulation of Foreign Agents", and the creation of life sentence for "Hate Crimes". These laws that violate constitutional rights, are part of a structure that provides legal support to the repression that the regime maintains in the country.

The vicious trials against political prisoners continued despite the pandemic,

nor natural disasters, nor the festivities characteristic of each month. This goes against the law and violates the rights of those who are being unfairly tried. To day, out of the 120 political prisoners, 25 face judicial prosecution and 95 have been sentenced.

The assassinations of peasants do not stop.

While it is not possible to point to concrete data due to the obvious difficulties of these cases, extrajudicial executions in the Nicaraguan rural areas or in the borders with Honduras and Costa Rica, have not only remained, but they have increased. The crimes continue without clarification, as well as who are the persons involved in these atrocious killings, which have forced dozens of families to flee and abandon

their homes due to the constant harassment that they suffer from the Police, the Army and paramilitary forces.

The abandonment of the communities in the Nicaraguan Caribbean was made clear after

hurricanes Eta and Iota, which left hundreds of affected families. The regime, which did not provide an effective response to the disaster, also avoided that private citizens and civic society organizations could send humanitarian relief. Once again, they criminalized solidarity.

Likewise, they practiced political propaganda with the donations submitted by international organizations such as the World Food Program (WFP). The relief was only delivered to people close to the regime, representing an inhumane act in a moment of extreme necessity for all people, without any political distinction, in the most affected communities of the Caribbean.

52 leaders of the National Union were harassed and persecuted.

Throughout the country, during the last 12 months, national and local leaders of the National Union were persecuted, harassed, physically attacked, searched, robbed, detained. To day several of our leaders remain detained arbitrarily in their own homes.

The extreme situation of violence that persists in the country, the violations against human rights, the terrorism of state, and the lack of political will by the dictatorship of Ortega-Murillo to stop it, is especially serious in an electoral year.

We reiterate our commitment denouncing the dictatorship internationally, demanding the appropriate sanctions against those who have committed crimes and cover-up corruption and crimes against humanity.

We reaffirm our decision to continue organizing ourselves in the territories and mobilizing, in all possible ways, to recover civil freedoms, reach the electoral reforms we demand. We believe in achieving democracy through elections, but in order to achieve this we need the appropriate conditions.

Managua, Nicaragua
January 8th 2021